Procedimiento probatorio en el proceso penal polaco
REVISTA JURÍDICA DERECHO
ISSN 2413 – 2810, Volumen 3. Nº 4 Enero - Junio, 2016, pp. 73 - 82

Procedimiento probatorio en el proceso penal polaco

Evidence proceedings in a polish criminal trial

*Dominika Merchel**
dominika.merchel@gmail.com

Presentado: febrero 25 de 2016. Aceptado: 03 de mayo de 2016

Resumen

El texto contiene información básica sobre los motivos de procedimiento de juicio penal polaco con referencia a otros ensayos europeos modernos. Se describen los principios sobre la recogida y examen de las pruebas, como principio de verdad material, principio de examen directo y el principio de libre valoración de la prueba. Además se incluye un reglamento detallado del código de procedimiento penal. Se señalan varias dificultades relacionadas con la modificación del proceso penal aprobado en 2015, especialmente relacionada con la aplicación y el uso de la evidencia privada. También discute varias evidencias como testimonio de un testigo, perito o partido y aclarar muchos tipos de testigos existentes en la legislación polaca. También informan construcciones de la admisibilidad como prueba, tales como frutos del árbol envenenado.

Palabras clave: Juicio penal, procedimientos de pruebas, verdad material, examen directo, libre valoración de la prueba, evidencia privada, frutos del árbol envenenado.

Summary

The text contains elementary information about grounds of polish criminal trial procedure with reference to other modern European trials. It refers to dominant principles about gathering and examination of evidence such as principle of material truth, principle of direct examination and principle of free assessment of evidence. Moreover, it includes detailed regulations of the code of criminal procedure. Further, it points out number of difficulties related to the big amendment of criminal trial adopted in 2015 especially associated with implementation and using of so-called private evidence. The article also discusses various evidences such as testimony of a witness, expert or party and clarify many kinds of witnesses existing in polish law. It also report constructions of the inadmissibility in evidence such as fruits of the poisoned tree.

Keywords: Criminal trial, evidence proceedings, material truth, direct examination, free assessment of evidence, private evidence, fruits of the poisoned tree.

* Abogada, Magister en Derecho de la Universidad de Gdansk, Polonia.(2005 - 2013)

Publicación de la Carrera de Derecho
Instituto de Investigaciones y Seminarios
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Las fuentes del derecho procesal penal

La principal fuente de derecho en Polonia es la Constitución del año 1997[1]. Contempla un amplio catálogo de derechos y libertades civiles, así como regula las cuestiones de régimen, incluida la jurisdicción. La Constitución establece que todo procedimiento judicial es al menos de dos instancias, determina el tiempo máximo de detención, el derecho a la defensa, el principio de presunción de inocencia, el derecho a un proceso debido, el derecho a la impugnación de sentencias y también aborda la cuestión de la extradición. Todo lo antes mencionado constituye un esbozo de las regulaciones relativas al procedimiento penal, completado por las leyes.

El proceso penal polaco tiene en la actualidad rasgos del modelo acusatorio-inquisitivo similar al proceso inglés y francés, aunque se aproxima más al proceso alemán[2]. En el marco del procedimiento se distinguen claramente tres etapas: sumarial (preliminar), judicial y ejecutiva.

En cada una de ellas un papel especialmente importante es asumido por el órgano público lo cual influye directamente en los principios del procedimiento probatorio y los respectivos derechos de las partes.

Además de la Constitución, la ley que abarca las normas de derecho procesal penal es el código de enjuiciamiento penal del año 1997. Contiene las normas que se refieren a las dos primeras etapas del proceso[3] que obliga a los órganos procesales y a las partes a actuar según principios muy bien definidos. Los principios que se refieren directamente al procedimiento probatorio en cada etapa del proceso son: el principio de la verdad material, el principio de la inmediación, rapidez y concentración del proceso y la libre apreciación de las pruebas.

El principio de verdad material

Según lo indicado anteriormente el proceso penal en Polonia se divide en principio en tres etapas básicas. La primera de ellas es la etapa sumarial cuyo objetivo es determinar si fue cometido un hecho dado y si se trata de un acto prohibido según las leyes en vigor, el descubrimiento del autor y la preparación de la causa para su presentación ante el juez. En esta etapa domina el modelo inquisitivo. El órgano competente para la persecución de delitos es la fiscalía.

El fiscal (excepcionalmente la Policía en casos menores) lleva el sumario (excepcionalmente diligencias previas). Aunque el sospechoso adquiere la condición de la parte lo cual tiene que ver con obligaciones por su parte, tiene también derechos, tales como la posibilidad de presentar solicitudes y conocer el expediente del procedimiento. El sospechoso tiene iniciativa probatoria lo cual significa únicamente que puede presentar la solicitud de obtención de pruebas por el órgano procesal o puede solicitar que se admita su participación en las diligencias probatorias. Por lo tanto, el sospechoso no tiene posibilidad de reunir pruebas

1. Omito aquí la problemática de la relación del derecho nacional con respecto al derecho de la Unión Europea debido a que el marco del presente trabajo no permite hacer un análisis detallado de dicha temática.

2. S. Waltoś, Proceso del esquema del sistema penal, Varsovia 2000, s.355.

3. El procedimiento de apremio está incluido en una ley aparte – ley relativa al procedimiento de apremio, aprobada también en 1997.

ISSN 2413 – 2810, Volumen 3. Nº 4 Enero - Junio, 2016, pp. 73 - 82

propias, ni de buscarlas por medio de actuación propia.

Si el procedimiento sumarial termina con la conclusión de que el delito ha sido cometido y su autor ha sido descubierto, el fiscal redacta el acto acusatorio[4], que envía al juzgado correspondiente. El acto acusatorio es la acción que da inicio al procedimiento y delimita el marco de la vista de la causa por el Juez. Esta etapa del procedimiento penal se caracteriza por el principio de contradictoriedad. El fiscal asume el papel del acusador y del otro lado está el acusado y su defensor (la defensa en algunas causas es obligatoria) y el juzgado, escuchando los argumentos de ambas partes, establece el estado de los hechos y evalúa la posible responsabilidad del acusado lo que se convierte en sentencia.

La práctica judicial tiene sin embargo un aspecto diferente debido al principio fundamental del procedimiento probatorio, o sea, el principio de la verdad material, la cual está expresada en la fórmula de que la base de todas las resoluciones en la causa deben ser las verdaderas determinaciones reales. Esto significa para el juzgado la obligación de obtener todas las pruebas que haya considerado necesarias para resolver el asunto. No está sujeto a las solicitudes del acusador y del acusado. Frecuentemente esta situación termina en que el juzgado hasta sustituye a las partes en sus actuaciones. El juzgado tiene la obligación de completar las insuficiencias del procedimiento y también aclarar de oficio cualquier circunstancia dudosa en cuanto a la autoría del acusado. El error cometido por el Juez en la determinación del estado real que incide en el contenido del fallo (aún, cuando las partes durante el proceso no cuestionan dichas determinaciones) puede tener como consecuencia la casación del fallo en el marco del control llevado a cabo por una instancia superior.

El procedimiento de enmienda

Además, igual que en el procedimiento sumarial, hasta mediados del mes de Julio del año 2015 no se admitía la posibilidad de presentar y aprovechar las llamadas pruebas propias por el acusado. Dicha categoría simplemente no existía[5]. Para el juzgado eran importantes tan solo las pruebas obtenidas por los órganos procesales públicos de manera prevista por las leyes. Por ejemplo – el acusado no podía aprovechar para su defensa las grabaciones registradas mediante instalación de escucha que él mismo le hubiese montado a otra persona para obtener de ella alguna información. Sin embargo, el día 1 de Julio de 2015 entró en vigor una amplia enmienda del código de enjuiciamiento penal. Tiene como objetivo ante todo ampliar la contradictoriedad del procedimiento penal en sus dos primeras etapas y el traslado de la obligación probatoria del Juzgado a las partes, lo cual acercaría el modelo del procedimiento penal al modelo del procedimiento civil, donde realmente la actuación del Juzgado se limita al principio *mihi factum dabo tibi ius*[6]. Dicha modificación, sin embargo, se refiere en gran medida al procedimiento

4. De cualquier modo, en el derecho penal polaco existe la posibilidad de presentación de la acusación ante el juzgado directamente por el propio perjudicado, pero esto se refiere principalmente a la limitada categoría de delitos claramente descritos, por ej. difamación (acusación privada) o a la situación en la que la fiscalía por diferentes razones deniega la presentación de la acusación en el juzgado y la parte agota el complicado procedimiento de impugnación de dicha resolución (acusación subsidiaria).

5. P. Kardas, Podstawy i ograniczenia przeprowadzania oraz wykorzystywania w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych, [w:] Palestra núm. 1-2/2015, pág. 7-23.

6. La mencionada reforma tiene un amplio alcance, en este trabajo se trata sólo la cuestión del procedimiento probatorio.

Publicación de la Carrera de Derecho
Instituto de Investigaciones y Seminarios
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

jurisdiccional. El principio de la verdad material sigue en vigor aunque se ha extenuado un poco, por lo menos teóricamente.

El Art. 167 del Código de Enjuiciamiento Penal de Polonia adquiere nuevo tenor que se refiere a la iniciativa probatoria. Establece que en el procedimiento ante el juzgado, iniciado a instancias de la parte, las pruebas son presentadas por las partes tras su admisión por el presidente del juzgado o por el juzgado. En caso de incomparecencia de la parte cuya solicitud de obtención de pruebas fue admitida, así como en casos excepcionales, justificados mediante circunstancias especiales, la prueba es obtenida por el juzgado en el marco del objeto de la prueba. En casos excepcionales, justificados con circunstancias especiales el juzgado puede admitir y obtener pruebas de oficio. Sin embargo, en procedimientos distintos a los arriba mencionados, así como en el procedimiento sumarial, las pruebas son obtenidas por el órgano procesal encargado de la gestión del procedimiento. Esto no excluye el derecho de la parte a presentar moción de descubrimiento de prueba.

La problemática de la presentación de pruebas en el proceso se complica aún más debido a la desconocida hasta el momento, prohibición probatoria expresada en el Art. 168 del Código de Enjuiciamiento Penal, el cual dice que es inadmisible la obtención y uso de prueba obtenida para los fines del procedimiento penal mediante un acto prohibido. La introducción de dicho reglamento tenía por objeto la eliminación de las divergencias en la judicatura, ya que, hasta el momento, los llamados frutos del árbol envenenado, eran tratados de manera muy variada. El reglamento difiere sin embargo del quizás más conocido principio del procedimiento probatorio en los procesos norteamericanos. En primer lugar, el precepto polaco no prohíbe hacer uso de una prueba surgida con otros fines, diferentes al procedimiento penal. Por consiguiente, parece que la prohibición fue prevista de forma muy reducida. En segundo lugar, parece dudoso de qué manera el juzgado va a evaluar si una prueba fue obtenida por medio de un acto prohibido. Es ésta una cuestión de procedimiento necesaria para poder comprobar la inadmisibilidad de la prueba, pero el reglamento no contiene ninguna indicación al respecto. No está claro tampoco, en caso de comprobar que la prueba fue obtenida por medio de un acto prohibido, si la posible incoación del procedimiento en contra de la persona que había cometido el delito relacionado con la obtención de dicha prueba influye en el curso del procedimiento principal.

Es un tema nuevo para la doctrina de derecho y es actualmente objeto de un animado debate.

Volviendo no obstante a la temática de las llamadas pruebas privadas, se debe mencionar la siguiente y nueva posibilidad de dar lectura en el juicio a todos los documentos privados creados fuera del procedimiento penal, sobre todo actas de manifestaciones, publicaciones, cartas y apuntes. Anteriormente se ha indicado que hasta el momento de la enmienda, se consideraba como prueba solo lo recopilado por los órganos procesales para las necesidades del procedimiento. La modificación de los reglamentos permite demostrar los hechos de una

ISSN 2413 – 2810, Volumen 3. Nº 4 Enero - Junio, 2016, pp. 73 - 82

forma completamente nueva. Por dar un ejemplo, cuando para resolver un caso se requiere información especial, el órgano procesal nombra a un perito. El perito es nombrado por el Juez y realiza lo encargado por mandato del juez. Si el acusado, fuera del procedimiento y por su cuenta, emplea a un especialista, por ejemplo, a un especialista en reconstrucción de accidentes automovilísticos, hasta ahora una opinión confeccionada así no tenía importancia para la resolución del asunto, ni siquiera cuando la parte en cuestión quería adjuntarla al expediente del caso, no era tomada en consideración como base para dictar sentencia. El juzgado, aun así, estaba obligado a nombrar a su propio perito. Después de la enmienda, no existen obstáculos para que la opinión de un perito contratado aparte sea considerada como parte del cuerpo del delito y aunque no ha sido igualada a la opinión de un perito judicial, la mayor parte de la doctrina afirma que su importancia procesal es la misma.

El nuevo modelo del procedimiento penal está en vigor desde hace más de seis meses, no obstante, la ley es de plena aplicación sólo en las causas incoadas después del día 1 de julio de 2015. Por lo tanto, una parte de las causas se sigue según las reglas antiguas. Por ello es muy difícil evaluar el funcionamiento del modelo nuevo. Tanto más que el legislador está examinando la posibilidad de retractar la enmienda aún este año.

Otras reglas de evidencia

El siguiente principio que rige el procedimiento probatorio es el principio de la inmediación. Significa que los órganos procesales deben efectuar la determinación de los hechos en base a las pruebas primarias y deben evitar sustituir dichas pruebas con las pruebas derivadas. Este principio puede ser deducido de varios reglamentos. Ante todo, se debe indicar que la base de la sentencia puede ser sólo el conjunto de circunstancias mostradas en el curso del juicio principal, lo cual significa las circunstancias establecidas por el propio juzgado o la circunstancia establecida de otra manera y mostrada por el juzgado. Además, el juzgado que resuelve la causa tiene la obligación de entablar contacto directo con la fuente de pruebas. Por ello es inadmisible la modificación de la composición personal del juzgado durante el curso del procedimiento. El juzgado, en casos excepcionales puede encargar la realización de las diligencias probatorias a otro juzgado única y exclusivamente cuando lo prevén las leyes. Suele ocurrir que el juzgado que examina el caso encarga la recepción de testigos que residen a gran distancia de su sede, al juzgado más cercano del testigo. Además, no está permitido sustituir la prueba obtenida de las confesiones del acusado o testigo por el texto de escritos, apuntes o anotaciones oficiales. Dicho principio sufre la mayor limitación en el procedimiento de apelación. El juzgado que resuelve la apelación puede obtener pruebas, pero la ley le prohíbe obtener pruebas relativas a la esencia del asunto. Cuando dicho juzgado estime que el procedimiento probatorio requiere ser repetido simplemente deroga la sentencia y transfiere el asunto al juzgado de primera instancia (que decidirá compuesto por otros jueces) para la repetición del juicio. El proceso debe trascurrir rápido y con eficacia. Las diligencias del juzgado deben ser centradas y constituir una

Publicación de la Carrera de Derecho
Instituto de Investigaciones y Seminarios
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

sucesión cerrada. No obstante, dicha rapidez no constituye un valor superior al curso correcto del procedimiento. De ahí que los procesos penales en Polonia suelen durar mucho tiempo. En asuntos complicados de mayor gravedad los procedimientos duran varios años. Lo cierto es que la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un juicio justo y público en un plazo de tiempo razonable. Sin embargo, durante mucho tiempo no existía en los reglamentos una vía eficaz hacia la denuncia de la demora del Juzgado. Polonia es también signatario del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del día 4 de noviembre de 1950, el cual contiene los mismos reglamentos que la Constitución. Además, Polonia está sujeta a la judicatura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una de las causas incoadas ante dicho Tribunal dio lugar a la aplicación de una ley especial. Mediante sentencia del día 26 de octubre de 2000 en causa número 30210/96 a instancias de Kudła contra Polonia el Tribunal dio constancia de la infracción por parte de Polonia de los derechos resultantes del Convenio y asignó a pagar una indemnización a favor del querellante. Como consecuencia de dicho fallo se introdujo en el sistema jurídico polaco la ley sobre el recurso de queja por infracción del derecho de la parte del procedimiento judicial a examinar su asunto sin indebida demora.

Si en el curso del proceso (la mencionada ley se refiere también al proceso civil) la parte del proceso considera que el juzgado sin motivo no inicia las diligencias o entre las diligencias hay una pausa injustificada, dispone de la posibilidad de interponer recurso. Dicho recurso, aunque no lo parezca, no acelera el procedimiento y lo único que causa es que el expediente sea trasladado a un juzgado de instancia superior y dicho juzgado examina todas las diligencias desde la perspectiva de su inicio en el plazo correcto. Si detecta alguna infracción en ese aspecto, expide la correspondiente resolución relativa a la dilación del procedimiento y otorga a la parte del procedimiento una indemnización particular de un valor de 2 a 20 mil Zlotys[7]. Después del cierre de este procedimiento incidental el expediente es devuelto al juzgado que examina el caso.

La última etapa del procedimiento probatorio es la apreciación de pruebas. El legislador por lo general impone determinadas reglas de apreciación de pruebas. A lo largo de la historia de derecho se distinguen diferentes sistemas de dichas reglas, desde las que categorizan las pruebas de manera más precisa – sistema basado en la llamada teoría legal probatoria, hasta las que permiten la libre valoración de pruebas por el juez. Actualmente el sistema que aparece en el proceso penal puede ser llamado, siguiendo la doctrina, sistema de la libre, controlada apreciación de pruebas. Dicho principio es expresado directamente en el código de enjuiciamiento penal, en su Art. 7 que dice que los órganos procesales forman su convencimiento en base a todas las pruebas obtenidas, apreciadas libremente considerando las reglas del razonamiento correcto y lo que indica el saber por experiencia. Esto significa que a la valoración no está sujeto el convencimiento del juez, sino el método por el cual el juez llegó a dicho convencimiento.

7. Como máximo 4,5 mil euros.

ISSN 2413 – 2810, Volumen 3. Nº 4 Enero - Junio, 2016, pp. 73 - 82

El juez debe guiarse por tres criterios objetivos: los principios del razonamiento lógico, indicaciones del saber y la experiencia. La última categoría es la más difícil de representar y definir. Principalmente se trata de ciertas reglas que rigen en el mundo, las regularidades sociales, los hechos de la vida cotidiana.

Todo el proceso de razonamiento del juez se refleja en la motivación de la sentencia. Es cierto también que el Juzgado expide la motivación de la sentencia después de su publicación y a instancias de la parte, no obstante, tiene la obligación de explicar en su contenido cuáles son los hechos que reconoce como probados y cuáles no, las pruebas en las que se basa y en qué medida no toma en consideración las pruebas contrarias.

Tal y como ya se ha mencionado anteriormente la parte descontenta de la resolución puede, en su recurso – apelación, indicar las determinaciones erróneas del estado de los hechos, así como la infracción de reglamentos procesales concretos relativa a las pruebas, mencionando qué impacto han tenido en el contenido de la sentencia.

Los medios individuales de evidencia

Por lo general, la primera prueba obtenida por el juez son las explicaciones del acusado. El acusado voluntaria y libremente puede prestar declaraciones con respecto al objeto del proceso. Tanto en el procedimiento sumarial, como en el judicial sus declaraciones se redactan en forma de un acta. Puede también, negarse a prestar declaraciones o negarse a responder a las preguntas, sin dar motivo. Dicha negación no tendrá para él consecuencias negativas de ningún tipo – expresa su derecho a la defensa. Lo que es interesante, el acusado no tiene tampoco la obligación de asumir los cargos, ni de decir la verdad. Además, el propio hecho de confesar su culpabilidad por el acusado ya no es evaluado según la categoría de la reina de las pruebas. Contrariamente al proceso inglés contemporáneo la propia confesión de la culpabilidad por el acusado (plea of guilty) no obliga al juez a desistir del resto del procedimiento probatorio y a dictar sentencia condenatoria. En Polonia no existe tampoco la institución del jurado que valorase la culpabilidad. Dicha competencia es asumida exclusivamente por el juez. Es cierto que en algunas categorías de asuntos al lado de los jueces profesionales aparecen los vocales, o sea, personas comunes, elegidas para desempeñar la justicia y que tienen el mismo alcance de competencias que los jueces profesionales. La confesión llana del acusado y las circunstancias claras de comisión del delito es lo que permite abreviar el procedimiento probatorio o el sometimiento voluntario a la condena. Sin embargo, si las circunstancias del hecho despiertan dudas o la determinación de la pena resulta discutible, el Juzgado lleva a cabo el procedimiento en su totalidad.

No cabe duda de que aparte de las declaraciones del acusado el medio de prueba más antiguo son las declaraciones de los testigos. El testigo presenta al órgano procesal lo que sabe de los hechos. Contrariamente al acusado está obligado a decir la verdad. En primer lugar, inmediatamente después de comprobar la identidad del testigo se le hacen las advertencias relativas a sus obligaciones – incluida

la obligación de decir la verdad con instrucción sobre la responsabilidad por prestar declaraciones falsas, así como de sus derechos, incluido el derecho a negarse a prestar declaraciones o a dar respuesta a preguntas. El testigo puede negarse a prestar declaraciones únicamente en los casos definidos legalmente, entre otros cuando está comprometido por un tipo especial de secreto profesional y no ha sido eximido de dicho secreto, cuando es familiar del acusado (la ley determina el grado de parentesco). En primer lugar, se le debe permitir al testigo una exposición libre y luego el juez y las partes hacen preguntas complementarias. Cuando durante el juicio ante el juez el testigo manifiesta no acordarse de los detalles de los hechos, se le da lectura de sus declaraciones prestadas en el procedimiento sumarial.

Un tipo especial de testigo es el llamado testigo anónimo. Es una persona que por varias razones se somete a protección especial y el juez decide mantener en secreto sus datos personales. Su interrogación se realiza de tal manera que no sea posible revelar su identidad. Normalmente dicho testigo no comparece en el juicio en la sede del juzgado, sino en otro lugar y dichos sitios están conectados entre sí por medio de equipamiento audiovisual.

El siguiente tipo de testigo destacado legalmente es el testigo colaborador. A dicha figura se le adjudicaba al principio un carácter temporal que debía estar en vigor hasta el año 2006, pero su vigencia fue prorrogada por tiempo indefinido. El testigo colaborador es el sospechoso en los casos de determinados delitos mencionados en un catálogo cerrado, cometidos por un grupo criminal organizado, que es admitido a prestar declaraciones en calidad de testigo contra los demás copartícipes. El premio por la colaboración con los órganos de persecución es la no sujeción a la pena por delitos en los que participó y los que reveló. Gracias a los testigos colaboradores en Polonia fue posible desintegrar y juzgar muchos grupos criminales organizados que en gran medida funcionaban a finales de los años 90. El testigo colaborador que declaró contra la llamada banda criminal de Pruszków (nombre derivado de la ciudad donde residía la mayoría de sus miembros) actualmente edita los populares libros que cuentan los secretos de la actividad criminal.

La problemática de las pruebas de las opiniones periciales ya se ha expuesto en la parte anterior. Lo que requiere análisis es la determinación de la diferencia entre inspección, inspección ocular y experimento procesal.

La inspección es el hecho de conocer por parte del órgano procesal el lugar, el objeto o el cuerpo de la persona. Pertenece por regla a actos irrepetibles. La inspección ocular en cambio es una diligencia criminalística que consiste en conocer el lugar del hecho para comprobar la información obtenida anteriormente. El experimento procesal adquiere la forma de experimento o reproducción de los sucesos que constituyen el objeto del procedimiento. Su objetivo es por lo general la comprobación de la versión del estado de los hechos determinado de otra manera. El catálogo presentado arriba no está completo. El derecho penal polaco no da un catálogo cerrado de pruebas. Junto con las ya expuestas existen también las pruebas de convicción (por

ISSN 2413 – 2810, Volumen 3. Nº 4 Enero - Junio, 2016, pp. 73 - 82

ej. instrumentos del crimen), pruebas de documentos, escucha procesal, averiguación del medio ambiente.

Prohibición probatoria

La última cuestión que merece ser tratada es la antes mencionada prohibición probatoria. El juez que examina un caso penal no está sujeto a las resoluciones de una cuestión dada que antes constituían el objeto del examen por el juzgado de lo civil o autoridades administrativas. Sin embargo, el Juzgado de lo penal está sujeto a las resoluciones firmes que forman el derecho o relaciones jurídicas. No puede, por tanto, ignorar una sentencia de divorcio o determinación de la paternidad. No se puede demostrar la existencia del derecho o de la relación jurídica a pesar de lo determinado en la resolución de otro juzgado.

La ley prohíbe también demostraciones por medio de determinadas pruebas. La mayoría de este tipo de prohibiciones se refiere a personas que por alguna cualidad especial no pueden ser citadas como testigos. Ante todo, nunca se puede nombrar un defensor que tuviese que testimoniar sobre las circunstancias que constituyen el secreto de la defensa. De la misma manera se dibuja la situación de un sacerdote-confesor en la confesión. Además, no se puede interrogar a los testigos que manifiestan que hacen uso del derecho a negarse a prestar declaraciones, ya que son personas cercanas del acusado o mantienen una relación íntima, ni a los testigos sujetos al secreto profesional o laboral – aunque en casos excepcionales el juez puede eximirlos de mantener el secreto.

Es obvio que un método prohibido de obtener pruebas son las torturas, pero está prohibido también limitar la exposición hecha por la persona interrogada en el marco determinado por el objetivo de su interrogación. Es inadmisible influir en las exposiciones de la persona interrogada por coacción o amenaza ilegal.

Se instituyó también la prohibición de aplicar hipnosis o medios químicos y técnicos que influyan en los procesos psíquicos de la persona interrogada o cuyo objetivo sea el control sobre las reacciones inconscientes de su cuerpo en relación con el interrogatorio. Esto significa también que los órganos procesales no pueden forzar a nadie a someterse al examen con ayuda de un variógrafo. Dicho examen puede realizarse exclusivamente bajo acuerdo expresado conscientemente por la persona interrogada (Art. 171 §5 punto 2 en relación con el Art. 199a del código de enjuiciamiento penal).

Conclusiones

Tomando en consideración las observaciones generales relativas al procedimiento probatorio en el proceso penal polaco se debe subrayar que actualmente el procedimiento atraviesa el mayor cambio desde el momento de aprobación del código de enjuiciamiento penal. Dichas modificaciones tienden a aumentar la dominación del principio de contradictoriedad del procedimiento lo que por un lado tiene relación con la ampliación de los derechos de las partes (sobre todo del acusado) hasta la introducción de pruebas no obtenidas por los órganos procesales correspondientes y por otro lado obliga a aumentar la problemática

Publicación de la Carrera de Derecho
Instituto de Investigaciones y Seminarios
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

de prohibiciones probatorias. Los reglamentos enmendados despiertan grandes controversias tanto en la doctrina de derecho, como entre los prácticos. Merece la pena observar el proceso de su aplicación en la práctica.

Bibliografía

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4th November, 1950 as published in Dziennik Ustaw 1993 No. 61, item 284;

The Constitution of The Republic of Poland of 2nd April, 1997 as published in Dziennik Ustaw No. 78, item 483;

The Code of Penal Procedure of 6th June, 1997 as published in Dziennik Ustaw No. 89, item 555, as amended;

The Penal Code of 6th June, 1997 as published in Dziennik Ustaw No. 89, item 553, as amended;

The act of complaint for violation of the right to examine a case immediataly of 17th June, 2004 r. as published in Dziennik Ustaw No. 179, item 1843, as amended;

The act of crown witness of 25th June, 1997 No. 115, item 738, as amended;

Others:

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010.

A. Bojańczyk, Czy zaniechanie przez sąd skorzystania z inicjatywy dowodowej może być przedmiotem kontroli odwoławczej w znowelizowanym procesie karnym? [at:] Palestra No. 5-6/2015, p. 201-206.

J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2008.

J. Grajewski (red.), Prawo karne procesowe – część ogólna, Warszawa 2009.

M.Kallas, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komenatrz, Warszawa 2001.

P. Kardas, Podstawy i ograniczenia przeprowadzania oraz wykorzystywania w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych, [at:] Palestra No. 1-2/2015, p. 7-23.

M.Oljenik, J.Pilc, Znowelizowany art. 427§3 k.p.k. w świetle zasady prawdy materialnej i prawa do obrony a tzw. prekluzja dowodowa, [at:] Palestra No. 1-2/2016, p. 146-155.

R. Rynkun- Werner, Adwokat z urzędu, Warszawa 2011.

D. Świecki, Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, Warszawa 2010.

S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, Warszawa 2016.

D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.

S. Waltoś, Proces karny zarys systemu, Warszawa 2000.

Procedimiento probatorio en el proceso penal polaco
REVISTA JURÍDICA DERECHO
ISSN 2413 – 2810, Volumen 3. Nº 4 Enero - Junio, 2016, pp. 73 - 82

Postępowanie dowodowe w polskim procesie karnym

Evidence proceedings in a polish criminal trial

*Dominika Merchel**
dominika.merchel@gmail.com

Presentado: febrero 25 de 2016. Aceptado: 03 de mayo de 2016

Podsumowanie

Tekst zawiera podstawowe informacje dotyczące polskiego procesu karnego w porównaniu do wybranych innych współczesnych modeli europejskich. Referuje naczelne zasady postępowania dowodowego takie jak zasada prawdy materialnej, zasada bezpośredniości i swobodnej oceny dowodów. Odnosi się także do szczegółowych rozwiązań przyjętych w kodeksie postępowania karnego. Co więcej, wskazuje na trudności związane z wielką zmianą procedury karnej wprowadzoną w 2015 r., w szczególności w zakresie możliwości wprowadzenia do procesu tzw. „dowodów prywatnych". Artykuł przedstawia także poszczególne dowody takie jak zeznania świadków, opinie biegłych, wyjaśnienia oskarżonych oraz wyróżnia rodzaje świadków w świetle obowiązujących przepisów. Odnosi się również do problematyki konstrukcji tzw. „owoców z zatrutego drzewa".

Słowa kluczowe: proces karny, postępowanie dowodowe, zasada prawdy materialnej, zasada bezpośredniości, zasada swobodnej oceny dowodów, dowód prywatny, owoce z zatrutego drzewa.

Summary

The text contains elementary information about grounds of polish criminal trial procedure with reference to other modern European trials. It refers to dominant principles about gathering and examination of evidence such as principle of material truth, principle of direct examination and principle of free assessment of evidence. Moreover, it includes detailed regulations of the code of criminal procedure. Further, it points out number of difficulties related to the big amendment of criminal trial adopted in 2015 especially associated with implementation and using of so-called private evidence. The article also discusses various evidences such as testimony of a witness, expert or party and clarify many kinds of witnesses existing in polish law. It also report constructions of the inadmissibility in evidence such as fruits of the poisoned tree.

Keywords: Criminal trial, evidence proceedings, material truth, direct examination, free assessment of evidence, private evidence, fruits of the poisoned tree.

* Abogada, Magister en Derecho de la Universidad de Gdansk, Polonia.(2005 - 2013)

Publicación de la Carrera de Derecho
Instituto de Investigaciones y Seminarios
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

1. Źródła prawa karnego procesowego

Podstawowym i nadrzędnym źródłem prawa w Polsce jest Konstytucja z 1997 r.[1] Zawiera ona szeroki katalog praw i wolności obywatelskich a także reguluje kwestie ustrojowe, w tym także te związane z wymiarem sprawiedliwości. Konstytucja stanowi, że każde postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne, określa maksymalny czas zatrzymania, prawo do obrony, zasadę domniemania niewinności, prawo do rzetelnego procesu, prawo do zaskarżania orzeczeń a także porusza kwestię ekstradycji. Powyższe stanowi zarys regulacji dotyczących postępowania karnego, który uzupełniają ustawy.

Współczesny polski proces karny ma cechy modelu skargowo- inkwizycyjnego podobnie jak proces angielski i francuski jednakże zbliżony jest najbardziej do procesu niemieckiego.[2]

W ramach postępowania wyróżnia się wyraźnie trzy etapy: przedsądowe (przygotowawcze), sądowe i wykonawcze. Na każdym z nich szczególną rolę odgrywa organ publiczny. Ma to bezpośredni wpływ na zasady postępowania dowodowego i uprawnienia stron w tym zakresie.

Podstawową, poza konstytucją, ustawą zawierającą normy prawa karnego procesowego jest kodeks postępowania karnego z 1997 r. Zawiera on normy odnoszące się do dwóch pierwszych stadiów procesu[3] który obliguje organy procesowe i uczestników do postępowania wg sprecyzowanych zasad. Zasady odnoszące się wprost do postępowania dowodowego na każdym etapie procesu to zasada prawdy materialnej, zasada bezpośredniości, szybkości i koncentracji procesu a także swobodnej oceny dowodów.

2. Zasada prawdy materialnej

Jak wcześniej wskazano proces karny w Polsce dzieli się co do zasady na trzy podstawowe stadia. Pierwszym z nich jest stadium przygotowawcze, którego celem jest ustalenie czy został dokonany dany czyn, czy stanowi on w świetle obowiązujących przepisów czyn zabroniony, wykrycie sprawcy i przygotowanie sprawy do przedstawienia jej sądowi. Na tym etapie postępowania dominuje model inkwizycyjny. Organem powołanym do ścigania przestępstw jest prokuratura.

Prokurator (wyjątkowo w sprawach mniejszej wagi Policja) prowadzi śledztwo (wyjątkowo dochodzenie). Jakkolwiek podejrzany uzyskuje status strony, co wiąże się przede wszystkim z obowiązkami po jego stronie, ma on również uprawnienia takie jak m.in. możliwość składania wniosków oraz zapoznanie się z aktami postępowania. Podejrzany ma inicjatywę dowodową oznacza to jednak tylko tyle, że może wnieść o przeprowadzenie dowodu przez organ procesowy, względnie może wnieść o dopuszczenie go do udziału w czynnościach dowodowych. Nie ma zatem podejrzany możliwości gromadzenia własnych dowodów, poszukiwania ich w drodze własnych działań.

Jeśli postępowanie przygotowawcze zakończy się konkluzją, że popełniono

1. Pomijam w tym miejscu problematykę relacji prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej, gdyż ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na szczegółową analizę tej tematyki.

2. S. Waltoś, Proces karny zarys systemu, Warszawa 2000, s.355.

3. Postępowanie wykonawcze objęte jest osobną ustawą – Kodeksem postępowania wykonawczego uchwaloną także w 1997 r.

ISSN 2413 – 2810, Volumen 3. Nº 4 Enero - Junio, 2016, pp. 73 - 82

przestępstwo i wykryto jego sprawcę prokurator sporządza akt oskarżenia[4], który przesyła do właściwego sądu. Akt oskarżenia jest skargą inicjującą postępowanie i wyznacza ramy rozpoznania sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania karnego cechuje się zasadą kontradyktoryjności. Prokurator przyjmuje postać oskarżyciela po drugiej zaś stronie staje oskarżony i jego obrońca (obrona w niektórych sprawach jest obowiązkowa) a sąd wysłuchując racji obu stron ustala stan faktyczny i ocenia ewentualną odpowiedzialność oskarżonego, która przybiera formę wyroku.

Praktyka sądowa przedstawia się jednak nieco odmiennie z uwagi na naczelną zasadę postępowania dowodowego tj. zasadę prawdy materialnej, która ujęta jest w formule, że podstawą wszelkich rozstrzygnięć w sprawie powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Oznacza to dla sądu obowiązek podjęcia wszelkich starań do realizacji tego założenia. Przede wszystkim Sąd ma prawo i obowiązek przeprowadzenia wszystkich dowodów jakie uznał za konieczne do rozstrzygnięcia sprawy. Nie jest ograniczony wnioskami oskarżyciela i oskarżonego. Często doprowadza to do sytuacji, w której sąd wręcz zastępuje strony w działaniu. Sąd ma obowiązek uzupełniać niedobory postępowania przygotowawczego, a także z urzędu wyjaśniać każdą okoliczność, która powoduje wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego. Popełnienie przez Sąd błędu w ustaleniach faktycznych, które miały wpływ na treść orzeczenia (nawet jeśli strony podczas procesu nie kwestionowały tych ustaleń) może skutkować uchyleniem wyroku w ramach kontroli instancyjnej.

Ponadto podobnie jak w postępowaniu przygotowawczym aż do połowy lipca 2015 r. nie było możliwe wprowadzenie i wykorzystanie przez oskarżonego tzw. dowodów prywatnych. Taka kategoria po prostu nie istniała[5]. Znaczenie dla sądu miały bowiem tylko dowody przeprowadzane w przewidzianej prawem formie przez publiczne organy procesowe. Dla przykładu – oskarżony nie mógł wykorzystać dla swojej obrony nagrań z podsłuchów, które sam zamontował u innej osoby celem uzyskania od niej jakiejś informacji.

3. Nowelizacja procedury

Natomiast 1 lipca 2015 r. weszła w życie ogromna nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Ma ona na celu przede wszystkim zwiększenie kontradyktoryjności postępowania karnego na dwóch pierwszych jego etapach i przesunięcie obowiązków dowodowych z Sądu na strony, co zbliżyłoby model postępowania karnego do modelu postępowania cywilnego, gdzie w zasadzie działanie Sądu ogranicza się do zasady da mihi factum, dabo tibi ius[6]. Zmiana ta odnosi się jednak w głównej mierze do postępowania jurysdykcyjnego. Zasada prawdy materialnej w dalszym ciągu obowiązuje chociaż została ona nieco osłabiona, przynajmniej teoretycznie.

Nowe brzmienie otrzymał art. 167

4. Jakkolwiek na gruncie polskiego prawa karnego istnieje możliwość wniesienia aktu oskarżenia do sądu bezpośrednio przez pokrzywdzonego to odnosi się ona w głównej mierze do wąskiej kategorii wyraźnie wskazanych przestępstw np. zniesławienia (prywatny akt oskarżenia) lub do sytuacji, w której prokuratura z różnych przyczyn odmówiła wniesienia aktu do sądu, a strona wyczerpała skomplikowaną procedurę zaskarżenia tej decyzji (subsydiarny akt oskarżenia).

5. P. Kardas, Podstawy i ograniczenia przeprowadzania oraz wykorzystywania w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych, [w:] Palestra nr 1-2/2015, s. 7-23.

6. Reforma, o której mowa ma szeroki zasięg, na potrzeby niniejszego opracowania odniesiono się jedynie do kwestii postępowania dowodowego.

Publicación de la Carrera de Derecho
Instituto de Investigaciones y Seminarios
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

kodeksu postępowania karnego, który odnosi się do inicjatywy dowodowej. Stanowi on, że w postępowaniu przed sądem, które zostało wszczęte z inicjatywy strony, dowody przeprowadzane są przez strony po ich dopuszczeniu przez przewodniczącego lub sąd. W razie niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, sąd może dopuścić i przeprowadzić dowód z urzędu. Natomiast w innym postępowaniu przed sądem niż wyżej opisane oraz w postępowaniu przygotowawczym dowody przeprowadzane są przez organ procesowy prowadzący postępowanie. Nie wyłącza to prawa do zgłoszenia wniosku dowodowego przez stronę.

Problematyka wprowadzania dowodów do procesu komplikuje się jeszcze bardziej z uwagi na nieznany do tej pory zakaz dowodowy sformułowany w art 168 a kodeksu postępowania karnego. Stanowi on, że niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego. Wprowadzenie tej regulacji miało na celu usunięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów, gdyż do tej pory w różny sposób traktowały one tzw. owoce zatrutego drzewa. Regulacja różni się jednak od chyba najbardziej znanej zasady postępowania dowodowego w procesach amerykańskich. Po pierwsze polski przepis nie zakazuje wykorzystywania dowodu, który powstał dla innych celów niż postępowanie karne. Wydaje się zatem, że zakaz został przewidziany zbyt wąsko. Po drugie wątpliwości budzi w jaki sposób sąd ma dokonywać oceny czy dany dowód został uzyskany za pomocą czynu zabronionego. Jest to kwestia proceduralna konieczna jest do stwierdzenia niedopuszczalności dowodu ale przepis nie zawiera w ogóle wskazań w tym zakresie. Nie jest też jasne, w przypadku stwierdzenia, że dowód został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, czy ewentualne wszczęcie postępowania przeciwko osobie, która popełniła przestępstwo w związku z uzyskaniem tego dowodu, ma wpływ na tok postępowania głównego.

Temat ten jest nowy dla doktryny prawa i w chwili obecnej stanowi przedmiot ożywionej dyskusji.

Powracając jednak do tematyki tzw. dowodów prywatnych, wskazać należy na kolejną nową możliwość odczytywania na rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych, powstałych poza postępowaniem karnym, w szczególności oświadczeń, publikacji, listów oraz notatek. Wcześniej wspomniano, iż do momentu nowelizacji za dowód uznawano tylko to, co zostało zebrane przez organy procesowe na potrzeby postępowania. Zmiana przepisów umożliwia dowodzenie faktów w zupełnie nowy sposób. Dla przykładu, gdy do rozstrzygnięcia sprawy potrzebne są wiadomości specjalne organ procesowy powołuje biegłego. Biegły powoływany jest przez Sąd i na jego zlecenie wykonuje opinię. Jeśli oskarżony poza postępowaniem na własny rachunek zatrudnił specjalistę np. z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych to do tej pory tak sporządzona opinia nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy,

ISSN 2413 – 2810, Volumen 3. Nº 4 Enero - Junio, 2016, pp. 73 - 82

nawet jeśli strona chciała dołączyć ją do akt sprawy nie stanowiła ona podstawy wyrokowania. Sąd zobligowany był i tak powołać swojego biegłego. Po nowelizacji, nie ma przeszkód by opinia prywatnie zatrudnionego eksperta została zaliczona w poczet materiału dowodowego. Nie została ona co prawda zrównana z opinią biegłego sądowego jednak większość doktryny opowiada się za tym, że jej waga procesowa jest taka sama.

Nowy model postępowania karnego obowiązuje od ponad pół roku jednak ustawa ma w pełni zastosowanie jedynie do spraw wszczętych po 1 lipca 2015 r. Wobec czego część spraw odbywa się w dalszym ciągu wg starych zasad. Trudno zatem dokonać oceny funkcjonowania nowego modelu. Tym bardziej, że ustawodawca rozważa możliwość cofnięcia nowelizacji i to jeszcze w tym roku.

4. Pozostałe zasady postępowania dowodowego

Kolejną zasadą rządzącą postępowaniem dowodowym jest zasada bezpośredniości. Oznacza ona, że organy procesowe powinny dokonywać ustaleń faktycznych w oparciu o dowody pierwotne a powinny unikać zastępowania tych dowodów dowodami pochodnymi. Zasadę tę możemy wywodzić z kilku przepisów. Przede wszystkim wskazać należy, że podstawą wyroku może być tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej, co oznacza, że są to okoliczności, które sąd ustalił sam lub ujawnił okoliczność ustaloną w inny sposób. Ponadto sąd rozstrzygający sprawę ma obowiązek bezpośrednio zetknąć się z danym źródłem dowodowym. Dlatego też niedopuszczalna jest zmiana składu orzekającego w toku postępowania. Sąd może jedynie wyjątkowo zlecić dokonanie czynności dowodowej innemu sądowi i tylko wtedy gdy przepisy to przewidują. Często zdarza się, że sąd rozpoznający sprawę zleca przesłuchanie świadka zamieszkującego w znacznej odległości od jego siedziby, sądowi najbliższemu danemu świadkowi. Co więcej dowodu z zeznań oskarżonego lub świadka nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych. Zasada ta doznaje największego ograniczenia w postępowaniu odwoławczym. Sąd rozpoznający apelację co prawda może przeprowadzać dowody, jednakże ustawa zabrania mu przeprowadzić dowody co do istoty sprawy. Gdy sąd ten uzna, że postępowanie dowodowe wymaga powtórzenia po prostu uchyla wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji (który naturalnie orzeka w innym składzie).

Proces powinien przebiegać sprawnie i szybko. Czynności sądu powinny być skoncentrowane i stanowić zwarty ciąg. Ta szybkość nie jest jednak wartością nadrzędną nad prawidłowym tokiem postępowania. Dlatego procesy karne w Polsce zwykle trwają długo. W sprawach skomplikowanych o największym ciężarze gatunkowym postępowanie toczy się kilka lat. Konstytucja co prawda stanowi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie. Jednak przez długi czas nie było w przepisach ustaw skutecznej drogi do skarżenia opieszałego rozpoznania sprawy przez Sąd. Polska jest też stroną Konwencji o Ochronie

Publicación de la Carrera de Derecho
Instituto de Investigaciones y Seminarios
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Praw Człowieka i Podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r., w która zawiera takie samo uregulowanie jak Konstytucja. Co więcej Polska podlega orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jedna ze spraw wniesionych do tego Trybunału spowodowała wprowadzenie specjalnej ustawy. Wyrokiem z dnia 26 października 2000 r. w sprawie nr 30210/96 Kudła przeciwko Polsce Trybunał stwierdził naruszenie przez Polskę praw Konwencji, zasądził na rzecz skarżącego zadośćuczynienie. Konsekwencją tego orzeczenia było wprowadzenie do polskiego systemu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Jeśli w trakcie procesu (ustawa powyższa odnosi się także do procesu cywilnego) strona uzna, że sąd bez przyczyny nie podejmuje czynności lub pomiędzy czynnościami jest nieuzasadniona przerwa ma możliwość złożenia skargi. Skarga ta jednak wbrew pozorom nie przyspiesza postępowania a jedynie powoduje, że akta sprawy trafiają do sądu nadrzędnego i sąd ten bada czy wszystkie czynności były podejmowane przez sąd we właściwym czasie. Jeśli stwierdzi uchybienia w tym zakresie wydaje postanowienie o stwierdzeniu przewlekłości postępowania i przyznaje stronie swoiste odszkodowanie od 2 do 20 tysięcy złotych[7]. Po zakończeniu tego postępowania wpadkowego akta sprawy wracają do sądu rozpoznającego sprawę.

Ostatnim etapem postępowania dowodowego jest ocena dowodów. Ustawodawca zwykle narzuca określone reguły wartościowania dowodów. W historii prawa wyróżniano różne systemy tych reguł od bardzo ściśle kategoryzujących dowody – system oparty na tzw. legalnej teorii dowodowej aż do pozwalających sędziemu ich ocenę całkowicie dowolnie. Obecnie system występujący w procesie karnym można w ślad za doktryną nazwać systemem swobodnej, kontrolowanej oceny dowodów. Zasada ta wyrażona jest wprost w kodeksie postępowania karnego w art. 7, który stanowi, że organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

Oznacza to, że ocenie instancyjnej nie podlega samo przekonanie sądu a metoda jaką sąd do danego przekonania doszedł. Sąd winien kierować się trzema obiektywnymi kryteriami : zasadami logicznego rozumowania, wskazaniami wiedzy oraz doświadczeniem życiowym. Ta ostatnia kategoria jest najtrudniejsza do uchwycenia i zdefiniowania. W głównej mierze chodzi tu o pewne reguły rządzące światem, prawidłowości społeczne, realia dnia codziennego.

Cały proces rozumowania sądu znajduje odzwierciedlenie w uzasadnieniu wyroku. Co prawda Sąd z reguły sporządza uzasadnienie wyroku dopiero po jego ogłoszeniu i na wniosek strony jednak ma obowiązek wyjaśnić tam jakie fakty uznał za udowodnione lub nie udowodnione, na jakich dowodach się oparł, w jakim zakresie a dlaczego nie uznał przeciwnych dowodów.

Jak już wcześniej wspomniano strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może

7. Czyli maksymalnie około 4,5 tys euro.

Procedimiento probatorio en el proceso penal polaco
REVISTA JURÍDICA DERECHO
ISSN 2413 – 2810, Volumen 3. Nº 4 Enero - Junio, 2016, pp. 73 - 82

w odwołaniu – apelacji wskazywać na błędne ustalenie stanu faktycznego a także na naruszenie konkretnych przepisów procesowych odnoszących się do dowodów wykazując jaki miały one wpływ na treść wyroku.

5. Poszczególne środki dowodowe

Zwykle pierwszym przeprowadzanym przez sąd dowodem są wyjaśnienia oskarżonego. Oskarżony może dobrowolnie i swobodnie wypowiedzieć się co do przedmiotu procesu. Zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym. Jego wyjaśnienia wpisuje się do protokołu. Może także bez podania przyczyny odmówić wyjaśnień lub odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania. Odmowa taka nie ma dla niego żadnych negatywnych konsekwencji – stanowi wyraz jego prawa do obrony. Co ciekawe nie ma on także obowiązku obciążania samego siebie ani nawet mówienia prawdy. Ponadto samo przyznanie się oskarżonego do winy nie jest już oceniane w kategorii królowej dowodów. W przeciwieństwie do współczesnego procesu angielskiego samo przyznanie się oskarżonego do winy (plea of guilty) nie obliguje sądu do zaniechania dalszego postępowania dowodowego i wydania wyroku skazującego. Nie ma w Polsce także instytucji ławy przysięgłych, która oceniałaby winę. Kompetencje w tym zakresie ma wyłącznie sędzia. Co prawda w niektórych kategoriach spraw obok sędziów zawodowych występują ławnicy czyli zwykli obywatele wybierani do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, jednak mają oni taki sam zakres kompetencji jak sędziowie zawodowi. Dopiero nie budzące wątpliwości przyznanie się oskarżonego do winy połączone z jasnymi okolicznościami popełnienia przestępstwa umożliwia skrócenie postępowania dowodowego lub dobrowolne poddanie się karze. Jeśli jednak okoliczności czynu budzą wątpliwości lub sporny jest wymiar kary Sąd przeprowadza proces w całości.

Nie ma wątpliwości, że obok zeznań oskarżonego najstarszym środkiem dowodowym są zeznania świadków. Świadek przedstawia organowi procesowemu swoją wiedzę o faktach. W przeciwieństwie do oskarżonego zobligowany jest mówić prawdę. W pierwszej kolejności zaraz po sprawdzeniu tożsamości świadka uprzedza się go o jego obowiązkach – w tym o mówieniu prawdy z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań oraz o jego uprawnieniach w tym o prawie do odmowy zeznań lub odpowiedzi na poszczególne pytania. Świadek może odmówić złożenia zeznań jedynie w przypadkachokreślonychustawowom.in. wtedy kiedy związany jest szczególnym rodzajem tajemnicy zawodowej i nie został z niej zwolniony, gdy jest krewnym oskarżonego (ustawa określa stopień pokrewieństwa). W pierwszej kolejności należy świadkowi umożliwić swobodną wypowiedź następnie sąd i strony zadają uzupełniające pytania. Gdy podczas rozprawy przed sądem świadek oświadcza, że nie pamięta szczegółów wydarzeń odczytuje mu się jego zeznania złożone w postępowaniu przygotowawczym.

Szczególnym rodzajem świadka jest tzw. świadek anonimowy. Jest to osoba, która podlega z różnych względów szczególnej ochronie i sąd postanowił zachować w tajemnicy jego dane osobowe. Jego przesłuchanie następuje w taki sposób aby nie można było ujawnić jego

Publicación de la Carrera de Derecho
Instituto de Investigaciones y Seminarios
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

tożsamości. Zwykle świadek taki nie stawia się na rozprawie w budynku sądu a w innym miejscu a miejsca te mają ze sobą łączność za pomocą sprzętu audio wizualnego.

Kolejnym wyróżnionym ustawowo rodzajem świadka jest świadek koronny. Instytucja ta miała mieć początkowo charakter czasowy i obowiązywać do 2006r. ale przedłużono jej obowiązywanie na czas nieokreślony. Świadek koronny to podejrzany w sprawach o określone przestępstwa wymienione w zamkniętym katalogu popełnione w zorganizowanej grupie przestępczej, który zostaje dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka przeciwko innym współuczestnikom. Nagrodą za współdziałanie z organami ścigania jest niepodleganie karze za przestępstwa w których uczestniczył a które ujawnił. Dzięki świadkom koronnym udało się w Polsce rozbić i osądzić wiele zorganizowanych grup przestępczych, które w głównej mierze działały pod koniec lat 90. Świadek koronny, który wystąpił przeciwko tzw. gangowi pruszkowskiemu (nazwa pochodzi od miasta gdzie zamieszkiwała większa część jego członków) w chwili obecnej wydaje popularne książki, w których odsłania kulisy działania gangsterów.

Problematyka dowodu z opinii biegłych była omawiana we wcześniejszej części postępowania. Omówienia natomiast wymaga określenie różnicy pomiędzy oględzinami, wizją lokalną i eksperymentem procesowym.

Oględziny to zapoznanie się przez organ procesowy z miejscem, rzeczą lub ciałem osoby. Należą z reguły do czynności niepowtarzalnych. Wizja lokalna to natomiast czynność kryminalistyczna polegająca na poznaniu miejsca zdarzenia w celu sprawdzenia wcześniej uzyskanych informacji. Natomiast eksperyment procesowy przybiera formę doświadczenia bądź odtworzenia przebiegu zdarzeń stanowiących przedmiot postępowania. Jego celem jest przeważnie sprawdzenie ustalonej w inny sposób wersji stanu faktycznego.

Katalog przedstawiony powyżej nie jest wyczerpujący. Polskie prawo karne nie precyzuje zamkniętego katalogu dowodów. Obok już omówionych występują także dowody rzeczowe (np. narzędzia zbrodni), dowody z dokumentów, podsłuch procesowy, wywiady środowiskowe.

6. Zakazy dowodowe

Ostatnim zagadnieniem wartym omówienia są, wspomniane szczątkowo wcześniej zakazy dowodowe. Tradycyjnie w polskiej nauce dzieli się je na zakazy dowodzenia określonych faktów, zakazy dowodzenia za pomocą określonych dowodów oraz zakazy stosowania określonych metod dowodzenia[8].

Wśród tej pierwszej kategorii możemy wyróżnić m. in. zakaz dowodzenia treści zeznań złożonych przez świadka, który skorzystał z prawa do odmowy zeznań a także z przebiegu narady sędziowskiej. Warto jednak szerzej wspomnieć o zakazie sformułowanym w art. 8 kodeksu postępowania karnego, który z jednej strony określa zasadę jurysdykcyjnej samodzielności sądu karnego z drugiej zaś kształtuje zakaz dowodowy. Sąd rozpoznający sprawę karną nie jest związany rozstrzygnięciami danej kwestii, które wcześniej były przedmiotem badania sądu cywilnego

8. S. Waltoś, Proces karny zarys systemu, Warszawa 2000, s.355.

ISSN 2413 – 2810, Volumen 3. Nº 4 Enero - Junio, 2016, pp. 73 - 82

lub władz administracyjnych. Jednakże Sąd karny jest związany prawomocnymi rozstrzygnięciami sądu kształtującymi prawo albo stosunek prawny. Nie może więc przykładowo ignorować wyroku orzekającego rozwód albo ustalającego ojcostwo. Nie można zatem dowodzić istnienia prawa lub stosunku prawnego wbrew ustaleniom orzeczenia innego sądu.

Ustawa zabrania też dowodzenia za pomocą określonych dowodów. Większość zakazów tego rodzaju odnosi się osób, które ze względu na jakiś szczególny przymiot nie mogą być powoływane na świadka. Przede wszystkim nigdy nie wolno powoływać obrońcy, który miałby świadczyć na temat okoliczności stanowiących tajemnicę obrończą. Podobnie wygląda sytuacja duchownego – spowiednika na okoliczność spowiedzi. Ponadto nie można przesłuchiwać świadków, którzy oświadczają, że korzystają z prawa do odmowy zeznań gdyż są osobami bliskimi oskarżonemu lub pozostają w szczególnie bliskim stosunku osobistym a także świadków związanych w różny sposób tajemnicą służbową lub zawodową – jednak w wyjątkowych sytuacjach sąd może zwolnić ich z zachowania tajemnicy.

Co oczywiste, zakazaną metodą uzyskiwania dowodów są tortury ale zakazane jest także ograniczanie wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w granicach określonych celem jej przesłuchiwania. Niedopuszczalne jest wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu lub groźby bezprawnej.

Ustanowiono także zakaz stosowania hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem. Oznacza to także, że organy procesowe nie mogą wymusić na żadnej osobie poddania się badaniu za pomocą wariografu. Takie badanie może odbyć się wyłącznie po wyrażeniu świadomej zgody przez osobę przesłuchiwaną (art. 171 §5 pkt 2 w związku z art. 199a kodeksu postępowania karnego).

7. Wnioski

Mając na względzie powyższe ogólne uwagi dotyczące postępowania dowodowego w polskim procesie karnym dostrzec należy, iż w chwili obecnej postępowanie to przechodzi największą zmianę od momentu uchwalenia kodeksu postępowania karnego. Zmiany te ogólnie zmierzają do zwiększenia dominacji zasady kontradyktoryjności postępowania, co wiąże się z jednej strony ze zwiększeniem uprawnień stron (głównie oskarżonego) do wprowadzania dowodów niezebranych przez odpowiednie organy procesowe a z drugiej strony wymusza konieczność rozbudowania problematyki zakazów dowodowych. Znowelizowane przepisy budzą ogromne kontrowersje zarówno wśród doktryny prawa jak i praktyków. Warto przyglądać się procesowi stosowania ich w praktyce.

8. Bibliografia

Legal acts:

1. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4th November, 1950 as published in Dziennik Ustaw 1993 No. 61, item 284;

2. The Constitution of The Republic of Poland of 2nd April, 1997 as published in Dziennik Ustaw No. 78, item 483;

3. The Code of Penal Procedure of 6th June, 1997 as published in Dziennik Ustaw No. 89, item 555, as amended;

4. The Penal Code of 6th June, 1997 as published in Dziennik Ustaw No. 89, item 553, as amended;

5. The act of complaint for violation of the right to examine a case immediataly of 17th June, 2004 r. as published in Dziennik Ustaw No. 179, item 1843, as amended;

6. The act of crown witness of 25th June, 1997 No. 115, item 738, as amended;

Others:

1. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010.

2. A. Bojańczyk, Czy zaniechanie przez sąd skorzystania z inicjatywy dowodowej może być przedmiotem kontroli odwoławczej w znowelizowanym procesie karnym? [at:] Palestra No. 5-6/2015, p. 201-206.

3. J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2008.

4. J. Grajewski (red.), Prawo karne procesowe – część ogólna, Warszawa 2009.

5. M. Kallas, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komenatrz, Warszawa 2001.

6. P. Kardas, Podstawy i ograniczenia przeprowadzania oraz wykorzystywania w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych, [at:] Palestra No. 1-2/2015, p. 7-23.

7. M.Oljenik, J.Pilc, Znowelizowany art. 427§3 k.p.k. w świetle zasady prawdy materialnej i prawa do obrony a tzw. prekluzja dowodowa, [at:] Palestra No. 1-2/2016, p. 146-155.

8. R. Rynkun- Werner, Adwokat z urzędu, Warszawa 2011.

9. D. Świecki, Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, Warszawa 2010.

10. S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, Warszawa 2016.

11. D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.

12. S. Waltoś, Proces karny zarys systemu, Warszawa 2000.